

## **ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS Y ACTOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR EN EL ECUADOR**

### **REGLAMENTO DE ACTUACIONES JUDICIALES PARA HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**

AUTORES: Rubén Darío Balda Zambrano<sup>1</sup>

Tania del Rocío Núñez Moran<sup>2</sup>

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: [ruben018@yahoo.com](mailto:ruben018@yahoo.com)

Fecha de recepción: 10-10-2016

Fecha de aceptación: 22-11-2016

#### **RESUMEN**

El “Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar” dispone la asignación inmediata de un agente fiscal, para que requiera a un Juez la adopción de una o varias medidas de protección en caso de que conozca cualquier hecho o acto de presunta violencia contra la mujer o miembros de la familia, el/la juez de forma inmediata deberá disponer dichas medidas, sin perjuicio de que la causa se encuentre en fase de investigación previa o no, las medidas de protección vigentes en el Código Orgánico Integral Penal, van desde una prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones, de acercarse a la víctima en cualquier lugar donde se encuentre, la extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima, la orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, hasta la fijación de una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión, la aplicación inmediata de estas medidas dispuestas por el Reglamento sin que se realicen las debidas investigaciones estigmatiza al denunciado que no siempre es responsable de la agresión, lo que se encuentra en contradicción con la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza el derecho a la presunción de inocencia, a ser escuchado en igualdad de condiciones y a ser juzgado por una Juez o Juez independiente, imparcial y competente, incidiendo negativamente en la administración de la justicia. En consideración a lo expuesto, se analiza la afectación de los derechos de la persona sospechosa dentro del sistema procesal y como la aplicación del Reglamento vulnera los principios de inocencia, contradicción e imparcialidad.

**PALABRAS CLAVE:** Violencia intrafamiliar; derechos; afectación; medidas de protección; inocencia.

## **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE REGULATION OF LEGAL PROCEEDINGS FOR FACTS AND ACTS OF VIOLENCE AGAINST WOMEN OR MEMBERS OF THE CORE FAMILY IN ECUADOR**

---

<sup>1</sup> Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Manta. Cursa estudios en la Maestría de Derecho Constitucional. Facultad de Postgrado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ecuador.

<sup>2</sup> Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Master en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, Universitat de Valencia – España. Docente, Universidad Espíritu Santo – Ecuador. E-mail: [tanianunez@uees.edu.ec](mailto:tanianunez@uees.edu.ec)

## ABSTRACT

The "Rules of court proceedings for facts and acts of violence against women or members of the family" has the immediate placement of a fiscal agent, to require a judge to adopt one or more protective measures if you know any fact or act of alleged violence against women or family members, the / the judge immediately must have such measures, notwithstanding that the cause is in phase prior or research, the protection measures in force the Code of Integral Criminal ranging from a ban on processed from going to certain places or meetings, to approach the victim wherever you are in person, the extension of a slip aid in favor of the victim, order leaving the person prosecuted housing or dwelling to fixing a pension which allows the livelihoods of people affected by the aggression, the immediate application of these measures provided by Regulation without proper investigations are carried stigmatizes the accused that is not always responsible for the attack, which is in contradiction with the Constitution of the Republic of Ecuador, which guarantees the right to the presumption of innocence, to be heard on an equal footing and to be tried by a judge or independent, impartial and competent judge, negatively affecting the administration of justice. In consideration of the foregoing, the infringement of the rights of the suspect in the trial system is analyzed and the application of the regulation infringes the principles of innocence, adversarial and impartiality.

**KEYWORDS:** Domestic violence; rights; involvement; protection measures; innocence.

## INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador<sup>3</sup>, es la norma jurídica fundamental que determina la organización del Estado y reglamenta el ejercicio de poder, estableciendo un régimen de garantías, consecuentemente el artículo 1 del Texto Constitucional ecuatoriano, establece que nuestro país es un Estado Constitucional de derecho y justicia, siendo así aceptada las teorías del neo constitucionalismo, donde prima el sistema garantista de derechos, principios y mandatos constitucionales insertos en los enunciados normativos de nuestra Carta Fundamental, siendo uno de ellos el Principio de Inocencia.

Jessica Victoria Sánchez Poma considera que para algunos tratadistas el origen de la Presunción de Inocencia, se encuentra en la revolución francesa de 1879, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por cuanto en ella se consagra por primera vez la presunción de inocencia como una garantía procesal para todos aquellos inculcados de hechos delictuosos. Dicha Declaración en su artículo nueve, consagra: "Presumiéndose inocente a todo hombre hasta que haya sido declarado culpable, si se juzga indispensablemente arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para asegurar su persona debe ser severamente reprimido por la ley" (Sánchez Poma, 2010, pág. 9),

Para Víctor Cubas Villanueva, es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio (Cubas Villanueva, 1997, pág. 25)

Francisco J. D´Albora el mencionado principio es aquel conforme el cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación jurídica que no requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador (D´Albora, 2002, pág. 25)

---

<sup>3</sup> De ahora en adelante CRE.

Este principio se encuentra en casi todas las constituciones en países democráticos, además está contenida en tratados internacionales sobre derechos humanos y en los ordenamientos procesales, para José Nolasco Valenzuela, el origen de la garantía jurisdiccional, que señala la prohibición de imponer una pena sin mediar juicio previo, junto a otros principios que son de obligatoria aplicación dentro del proceso, al ser la atribución de inocencia un estado natural reconocido a toda persona o todo individuo, hasta que no se demuestre legalmente lo contrario una persona debe recibir la categoría de inocente, por cualquiera sea el delito que se lo investigue o que se le impute. (Valenzuela, 2012, pág. 70)

La presunción de inocencia no es un simple principio de interpretación ni una regla probatoria, sino un derecho con significado práctico a lo largo del proceso penal que garantiza una protección especial acusadas por algún delito (Aguilar García, 2013, pág. 9)

La presunción de inocencia es una garantía constitucional reforzada por los tratados de derechos humanos suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna persona podrá ser tratada como autora o participe de un hecho delictivo, esto mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada (López, 2013)

La violación al principio constitucional de presunción de inocencia en casos de violencia intrafamiliar ha sido un tema de escaso debate, debido a que se da especial atención a la protección de la mujer y miembros de la familia como grupo de atención prioritaria en casos de violencia. El juez al disponer la aplicación de medidas en favor de la protección de la mujer y demás miembros de la familia no toma en cuenta la posibilidad de que se esté afectando derechos constitucionales específicos del presunto agresor que en casos específicos ha resultado ser la víctima de un sistema judicial que no toma en consideración la posibilidad de que se acuda a los ámbitos judiciales de forma mal intencionada.

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un ordenamiento dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno de los derechos humanos (Ferrer Mac- Gregor & Pelayo Moller, 2012, pág. 154)

## DESARROLLO

### *Análisis del Marco jurídico de la Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar y su alcance.*

Previo a entrar de lleno al tema central, debemos tener claros varios conceptos pertinentes, la Ab. Marena Briones Velasquegui, parafraseando lo expuesto por la asesora de la Unidad de Género y Salud de la Oficina Regional de la OMS, Diny Luciano, “La violencia (...) contra mujeres en América Latina es uno de los problemas más graves de salud pública y derechos humanos en la región. Estudios de la OPS/ OMS muestran que más del 36% de las chicas y el 29% de chicos han sufrido abuso (...) infantil. Una significativa proporción de mujeres jóvenes dijeron que su primer contacto sexual se produjo bajo coerción y hasta una tercera parte de las adolescentes ha sufrido una iniciación sexual forzada. Según estos mismos datos, en algunos países, casi una de cada cuatro mujeres casadas confeso haber sido víctima de violencia sexual por parte de su pareja. A esto se suma el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Que es otro factor de la propagación del VIH/ SIDA.” (Briones Velasteguí, 2008, pág. 9)

La violencia doméstica o intrafamiliar es uno de los problemas más dolorosos y complejos con los que la sociedad ha coexistido, este tipo de violencia afecta a las mujeres y a su entorno familiar, es una acción destructiva que atenta contra la integridad física, sexual, psíquica (autoestima, autoimagen) de quien la sufre (Saavedra García, 2013, pág. 35)

De acuerdo a la OMS, la violencia contra la mujer, de manera especial la violencia generada por la pareja y la violencia sexual, la define como “un problema de salud pública que afecta a todas las sociedades y es una clara violación de los derechos humanos de las mujeres”. (Organización Mundial de la Salud, 2012, pág. 39)

Para la Dra. Victoria Silva, la violencia intrafamiliar o violencia doméstica es el acto violento que se da en el hogar y que son realizados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar, generalmente la mujer; aunque en la praxis podemos observar que efectivamente y de forma ms general la víctima siempre es la mujer, pero en los últimos años las estadísticas ofrecidas por los medios de comunicación, dan cuenta que existen otros grupos familiares afectados como son niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres (Silva V. , 2012)

Guillermo Cabanellas, nos indica al respecto de la violencia como: “Situación o estado contrario o naturaleza, modo o índole. Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento. Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno quiere, o se abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. Presión moral. Opresión. Fuerza. Todo acto contra justicia y razón...” (Cabannellas , 1998, pág. 410)

Uno de estos instrumentos es la Ley Penal vigente<sup>4</sup>, en cuyo contenido se incluyen importantes avances en relación a la violencia contra la mujer, tales como: tipificación del femicidio, ampliación de los tipos penales referente a los delitos relacionados a la violencia contra la mujer y trata de personas, ratificación de las contravenciones por maltrato físico a la mujer en el caso de que la incapacidad de la víctima no exceda de tres días, cuyos casos serán conocido por jueces especializados contra la violencia a la mujer y la familia de acuerdo al artículo 81 de la CRE, prevé un “procedimiento expedito en los casos de delitos de violencia intrafamiliar” .

Las Naciones Unidas, en su Nota Informativa No.4, establecen que “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzando hacia la igualdad, el desarrollo y la paz” (Naciones Unidas, 2000),

La violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes es, sin duda, una clara violación a los derechos humanos. Distintos instrumentos internacionales ha reiterado una y otra vez que esas agresiones- dentro de ellas, las de carácter sexual en particular- deben ser un tema urgente en las agendas públicas nacionales e internacionales. Y los Estados particularmente, de las reuniones y conferencias respectivas, no han escatimado palabras para asumir expresamente ese compromiso (Briones Velasteguí, 2008, pág. 15)

Ecuador, al erigirse en nuestra CRE como un Estado Constitucional, se erige como un Estado Garantista; debemos de forma necesarísima el de aclarar que la relación entre los conceptos de garantía y derecho origina confusión, debido a sus conceptos muy amplios. Para Chávez Vallejo nos indica lo siguiente: “Los derechos generalmente aparecen como garantías normativas en los

---

<sup>4</sup> Al hablar de Ley Penal vigente, estaríamos hablando del Código Orgánico Integral Penal, en sus siglas COIP.

cuerpos constitucionales, mientras que las garantías propiamente dichas aparecen como mecanismos de ejercicio de los derechos en textos legales y constitucionales” (Chávez Vallejo & Montaña, 2013, pág. 43), el constitucionalismo persigue el fin de limitar al poder a través de los derechos (Silva C. , 2008 , pág. 65), es decir, el papel del Estado garantista es el de reducir al máximo la arbitrariedad, utilizando para ello al Juez, que es el garante por antonomasia en este Estado Constitucional de derecho y justicia.

La violencia intrafamiliar consiste en la utilización deliberada de la fuerza para la manipulación y control del cónyuge o de un familiar cercano. Consiste en el abuso psicológico, sexual o físico de manera habitual; el cual sucede entre personas relacionan de manera afectiva (Joachín López, 2008, pág. 1)

El artículo 558 del COIP, sobre la adopción de medidas de protección por violencia intrafamiliar señala que estas se dispondrán de manera inmediata en caso de contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se impondrán medidas de protección a favor de las víctimas en el caso de delitos contra la mujer o miembros del núcleo familia, delitos de integridad sexual y reproductiva e integridad y libertad personal, trata de personas, de existir mérito el fiscal solicitará al juez la adopción de las medidas de forma inmediata.

Las medidas de protección contempladas en el artículo 558 del COIP, comprenden la prohibición de que el procesado pueda concurrir a lugares y reuniones, prohibición de acercarse a la víctima, testigos y determinadas personas, de realizar actos de persecución a la víctima o sus familiares por sí mismo o mediante terceros, extensión de boleta de auxilio a la víctima o familia, orden de salida de la vivienda del procesado para evitar riesgos físicos, psicológicos o sexuales, reintegro a la víctima al domicilio, privación al procesado de la custodia familiar de la víctima, orden de desalojo a invasiones o asentamientos ilegales con el auxilio de la fuerza pública, fijación de pensión para la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión en caso de violencia intrafamiliar, entre otras medidas alternativas.

En el caso de las víctimas la CRE, en el artículo 35 se dispone la “protección a las víctimas de violencia doméstica y sexual” además en el artículo 78 se señala la protección especial a las víctimas de infracciones penales, se establece el sistema de sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes procesales.

El derecho a la protección especial de víctimas de violencia intra familiar tienen como finalidad compensar las posibilidades de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad; sin embargo se debe tener en cuenta que no se trata de derechos especiales para una persona con la afectación de los derechos de las otras personas, sino de derechos para personas en condición de vulnerabilidad que no deben afectar los derechos de los demás miembros de la familia; por lo tanto se debe nivelar el conflicto y propiciar justamente la equidad en donde el presunto agresor no puede perder la categoría de presunto inocente e imponérsele una medida de protección, que le da una categoría de culpable y afecta sus derechos.

La protección de la víctima como sujeto pasivo del delito es ampliamente estudiado por la victimología definida como el estudio de la víctima del delito, su personalidad, características generales y específicas así como su relación con el delincuente y su papel en la génesis del delito (Marchiori, 2006, pág. 21).

La preocupación por una mejora de las situaciones de las víctimas de los delitos fue fuertemente impulsada a la raíz de los años setenta, gracias al movimiento feminista que señaló especialmente

a las mujeres y niños como las víctimas predominantes de los abusos masculinos que se comenten en el ámbito de las familias (Marchiori, 2006, pág. 6).

Dada la relevancia que han alcanzado las medidas de protección en favor de víctimas de la violencia intrafamiliar la protección de sus derechos, no solo deben estar contenidos en la ley, sino que el Estado para su protección ha establecido los mecanismos formales que permiten la actualización, protección y faciliten su libre ejercicio con la finalidad de que las mujeres tengan un acceso ágil y oportuno a los procedimientos.

Tomándose en cuenta que los hechos violentos contra las mujeres no son producto de actos aislados, sino que son hechos producidos de forma constante, ante lo que el estado se ve obligado a intervenir mediante políticas, medidas de atención y mecanismos a fin de erradicar, sensibilizar y brindar apoyo oportuno a los miembros de la familia víctimas de violencia intrafamiliar.

La mujer y los miembros del núcleo familiar sometidos a actos de violencia intrafamiliar reciben la categoría de víctimas, que de acuerdo a la definición de la palabra víctima dada por Luigi Ferrajoli, “son personas que han sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito” (Ferrajoli, 2001, pág. 76)

Para el tratadista García, que en sus investigaciones sobre el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, señala como derechos de las víctimas los siguientes:

- Derecho a intervenir en el proceso penal en calidad de acusador particular;
- Intervenir en el proceso penal como acusador particular;
- A que se le brinde atención médica inmediata y asesoramiento de manera gratuita;
- Protección a la víctima y a su familia;
- Recibir un trato respetuoso por parte de los agente;
- Recibir un trato respetuoso por parte de los agentes;
- Recibir información oportuna sobre el estado de la investigación y su situación;
- Requerir ayuda psicológica para la víctima o sus familiares;
- Dar las declaraciones para esclarecer las investigaciones;
- Ejercer acciones civiles por los daños y perjuicios además del daño moral;
- Reserva de la identidad si se trata de víctimas menores de edad (García, 2011, pág. 68)

A pesar de que el derecho al acceso a la justicia es un derecho común a todas las personas, en algunos casos, su acceso es más complicado para unas personas, por ejemplo, en este grupo se encuentran los grupos vulnerables considerados de atención prioritaria según el artículo 35 de la CRE, a los que se les brinda atención prioritaria en los ámbitos público y privado, además quedan prohibida la revictimización. De conformidad con el artículo 78 de la CRE.

Contrario a lo que establece la CRE, el sujeto pasivo del delito siempre sufre una revictimización, en primer lugar como víctima del delito y en segundo lugar víctima de relación entre el Estado y el delito, “que generalmente es causada por inadecuadas conductas de la policía, funcionarios encargados de la administración de justicia o por el desbalance entre los derechos de la víctima y el procesado”. (Zaffaroni, 2000, pág. 12)

En este contexto las órdenes de protección emergen como mecanismos que permiten hacer efectivos los derechos humanos de las víctimas de violencia intrafamiliar, cuya finalidad es abstener al agresor de que hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la integridad de la mujer, de su familia o propiedad

Para Velázquez, las medidas de protección comprenden el conjunto de actitudes y decisiones incorporadas por el estado a través de sus diversas instituciones públicas, que buscan hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, en relación a la agresión misma y a su agresor, son mecanismos que brindan apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impiden que estas se continúen ejecutando, otorgándole tranquilidad a la víctima para que pueda incorporarse a la sociedad (Velazques, 2007, pág. 100)

Se cuestiona la apresurada aplicación de las medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar, debido a que viola la presunción de inocencia del acusado, que corresponde al derecho que le asiste a toda persona a que se la trate en calidad de inocente mientras no se establezca su culpabilidad en un proceso.

Para analizar la afectación de la presunción de inocencia es necesario señalar que este principio se origina en los derechos humanos, que junto a otros derechos presentan como característica general, que son interdependientes, que forman parte de un sistema integral donde los unos son fundamento de los otros, en consecuencia, la violación de alguno de estos derechos generalmente produce la transgresión de otros.

El Ecuador, definido en el artículo 1 del Texto Constitucional, como un “estado constitucional de derechos y justicia” reconoce ampliamente en el artículo 75 de la misma norma legal el derecho a la justicia, la aplicación de los principios de inmediación, celeridad y prohibición de la indefensión, la gratuidad de la justicia, tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, además de la prohibición de la indefensión.

La presunción de inocencia forma parte de uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico en un estado democrático, solo es posible determinar la responsabilidad penal del acusado mediante juicio en el que se acredite su culpabilidad (Muñoz, 2003, pág. 81), su razón de ser se fundamenta en la seguridad jurídica, la garantía de que una persona puede ser condenada solamente cuando existan pruebas suficientes que destruyan esta presunción.

En el artículo 76 numeral 2 de la CRE, reconoce la presunción de inocencia como un derecho fundamental común a todas las personas, el que sólo se anula en caso de que se declare la sentencia ejecutoriada, lo que significa que el derecho de defensa, en ningún momento debe ser violado, garantizando a las personas que sean consideradas como inocentes por cualquier delito, mientras no existan pruebas suficientes que permitan determinar la responsabilidad.

Dicha garantía se encuentra plasmada en concordancia con lo estipulado en el artículo 5 del COIP, en el numeral 4 de acuerdo a que la persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y deberá ser tratado como tal mientras no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia condenatoria.

La presunción de inocencia como un principio de las legislaciones de los países democráticos ampara a los acusados, la responsabilidad por el delito que se imputa será demostrada por el acusador, a fin de establecer la responsabilidad y lograr que se imponga la respectiva pena, para el mismo tratadista que distingue entre la inocencia sustancial e inocencia formal, define la inocencia sustancial como aquella en la que no existe culpa; mientras que la inocencia formal es

la que se establece a través de la declaración de inculpabilidad dictaminada por el órgano jurisdiccional competente (Prado, 2013, pág. 19; 20).

En el principio de presunción de inocencia se encuentran tres significados claramente definidos:

- a) Es un concepto fundamental en donde se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se establecen garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal.
- b) Postulado que se refiere al tratamiento que recibe el imputado durante el proceso penal, de acuerdo a que se parte de la idea de que el inculpaado es inocente, en consecuencia, deben reducirse lo menos posible las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento que se le brinde al imputado durante el proceso, aplicando la prisión preventiva de manera excepcional.

O como una regla que se refiere directamente al juicio de hecho de la sentencia penal, que incide en la carga probatoria, de acuerdo a la que la prueba completa de la culpabilidad del imputado será proporcionada por la parte administradora, absolviendo al inculpaado si la responsabilidad no se demuestra.

En el Ecuador la presunción de inocencia forma parte de los derechos de protección, por lo tanto, es un derecho de carácter subjetivo público, que se limita o se pierde por acción de los órganos jurisdiccionales penales, en la legislación ecuatoriana los tres significados son plenamente aplicables a la interpretación de los alcances de dicho derecho.

La inocencia o la responsabilidad es dictaminada por los órganos jurisdiccionales competentes, en donde se ha establecido el grado de participación del acusado, el ilícito penal que se le atribuye, conservándosele la categoría de inocente si no existe una transgresión a la norma considerada como delito o no se ha infringido ninguna prohibición, o si ejecuta la acción existe alguna norma legal que elimine la antijuridicidad de la conducta, o si se ha producido alguna causa que elimina la culpabilidad (Maier, 2004, pág. 84)

Los elementos característicos del principio de presunción de inocencia se enmarcan en el ordenamiento jurídico del Ecuador, los mismos que deben observarse, para su cumplimiento.

- a) La aplicación del principio de presunción de inocencia tiene un carácter obligatorio, para Catacora un imperativo legal mediante el que toda persona a la que se le impute la comisión de un delito, en la sustanciación del proceso será tratado como inocente.
- b) La presunción de inocencia establecida por la ley penal como garantía constitucional y procesal, será desvirtuada exclusivamente mediante la sentencia condenatoria, con autoridad de cosa juzgada.
- c) Para que se aplique el principio de presunción de inocencia, se requiere la existencia de un proceso penal con la aplicación de todos sus principios y garantías.

La calidad de inocencia es un importante elemento para la garantía de libertad individual, se fundamenta en la regla de no coercibilidad del imputado, la producción de la prueba hecha en forma oficial, además hace énfasis en resaltar que la presunción de inocencia ha sido formulada de forma positiva o negativa por siempre, colocando siempre al sospechoso o procesado en una situación de no culpabilidad mientras no se lo declare mediante sentencia (Catacora, 2004, pág. 45; 46).



El Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en vigencia a partir de la Resolución No. 172-2014, emitida por el Consejo de la Judicatura, tiene como principal fuente de inspiración la potencial afectación de los derechos de libertad, señalados en el artículo 66 numeral 3 de la Carta Fundamental, en sus literales a, b y c esto es, el derecho a integridad, a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, prohibición de tortura, tratos crueles o degradantes.

Tomando en consideración lo señalado en el artículo 11 de la CRE, sobre la igualdad de derechos deberes y oportunidades, la prohibición de la restricción de contenido de los derechos y de las garantías constitucionales, así como el reconocimiento de los derechos en su calidad inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía

El artículo 1 del citado reglamento, dispone que cuando de cualquier forma un hecho o un acto de presunta violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar llegue a conocimiento de la Fiscalía se asignará de forma inmediata una o un Fiscal el que solicitará al juzgador de garantías penales de turno la adopción de una o varias medidas de protección

De acuerdo al artículo 2 del precitado Reglamento, una vez que el juzgador de garantías penales de turno, avoque conocimiento del requerimiento de la o el fiscal dispondrá de manera motiva o inmediatamente, a través de los medios referidos en el artículo anterior y sin necesidad de convocar a audiencia, la adopción de una o más medidas de protección, a favor de la víctima, sin perjuicio de que la causa se encuentre en la fase de indagación previa, conforme a la disposición contenida en el segundo inciso del artículo 558 del COIP.

El dictamen de las medidas de protección se lo notificara través de los miembros de la policía nacional. Cabe resaltar que la adopción de las medidas de protección en favor de la víctima debe realizarse por el juez de garantías penales de manera motivada e inmediatamente, lo que faculta al juez para que pueda dictar algunas de las medidas de protección del artículo 558 del COIP, que puede ir desde la prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones a la fijación simultánea de una pensión que permita la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión de conformidad con la normativa sobre la materia.

La posibilidad que tiene el Juez de Garantías Penales de dictar las medidas de protección en favor de la víctima, vulnera un conjunto de derechos del presunto responsable que van desde el derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones hasta el derecho a que se presuma su inocencia, al dictar la medida de protección en favor de la supuesta víctima existe una presunción de responsabilidad de la persona señalada como agresora, pues ni siquiera esta se le da la oportunidad de asistir a una audiencia para exponer sus argumentos, no significa esto que se esté en contra de las medidas de protección sino que se debe regular el procedimiento para dictarla, pues en muchos casos los conflictos que se generan en el interior de las familias derivan en situaciones mal intencionadas, donde la mujer se victimiza y acude a instancias legales como una forma de venganza.

Compartimos el criterio de si el acusado por la agresión es responsable de los hechos que dan lugar al dictamen de las medidas de protección, entonces procede que caiga sobre él todo el peso de la ley, pero en el caso de que no lo sea, ya se le ha condenado de forma anticipada al restringir sus derechos. Frente a este escenario, la única manera de garantizar el principio de presunción de inocencia, contradicción e imparcialidad procesal es respetando sus derechos por cualquiera sea el tipo de delito que se le imputa.

Es por lo tanto necesario, que se reglamente de forma más clara las condiciones que deben mediar para que se dicte la medida de protección en donde se deben tener en cuenta el riesgo eminente a la que se expone la víctima así como antecedentes del presunto agresor, además de sus versiones en audiencia que debe realizarse inmediatamente después de tener conocimiento del presunto acto de violencia.

El dictamen de las medidas de protección viola además el derecho de defensa que dentro del sistema de garantías cumple un rol especial, por una parte, es una garantía constitucional además de ser la principal vía que permite asegurar la efectiva vigencia de las demás garantías procesales, además, es un principio básico que en caso de no dársele el debido cumplimiento las demás garantías no cumplirán su función específica, como dato estadístico las Unidades de Violencia han emitido en lo que va del año 2015 hasta la presente fecha, tomando como base la ciudad de Manta, por los numerales 3 y 4 del artículo 558 COIP 359 medidas en el año 2015 y en el presente año, 2016, por los numerales 3 y 4 del antes referido artículo penal 202, es decir, un total de 561 medidas de protección.

En el ejercicio de sus derechos de protección el presunto agresor debe ser sometido al debido proceso que incluye en el literal k del artículo 76 de la Constitución, como garantía básica el derecho a “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente”, se reconoce entonces que el derecho al juez imparcial es un derecho fundamental implícito basado en el principio de dignidad humana que comprende una expresión del debido proceso.

La imparcialidad del Juez es un requisito indispensable del debido proceso, para garantizar la imparcialidad jurisdiccional, implica que el juez en el ejercicio de sus funciones sea lo más objetivo posible, de manera que pueda determinar el grado de participación y responsabilidad en el delito que juzga.

Más aun, la imparcialidad del juzgador, es una garantía de seguridad jurídica para las partes procesales, ya que asegura y reafirma el concepto de igualdad, uno de los pilares en donde se cimenta el Estado Constitucional de derecho, cuyos postulados fundamentales desarrollan una formulación extensiva de los valores, principios y derechos que convergen en la Constitución, tal como lo expone la Dra. Gina Chávez y Juan Montaña “La Constitución de Montecristi asume los postulados fundamentales del Estado Constitucional, reforzando algunos elementos sustanciales: (...)

2. Caracteriza al Estado como Constitucional de derechos y justicia, haciendo de los derechos- los contemplados en la Constitución-, instrumentos internacionales de derechos humanos y otro que garanticen la dignidad humana-, y de la búsqueda de la justicia, el eje central de la articulación del Estado con la sociedad... 4. Pone a todos los derechos en igualdad de jerarquía, lo que significa que no hay derechos de primera, segunda o tercera generación, o que unos derechos son más importantes que otros. En este sentido, todos los derechos alcanzan la categoría de derechos fundamentales, esto es, son plenamente justiciables. (...)

8. Dispone a las servidoras y servidores públicos, administrativos y judiciales, aplicar la norma y la interpretación que más favorezca la efectiva vigencia de los derechos (art. 11, núm. 5, CPE). (...)

11. Refrenda el respeto de los derechos como el más alto deber del Estado (art. 11, núm. 9, CPE)...” (Chávez Vallejo & Montaña, 2013, pág. 19; 20), con ello, el Juez no está sujeto a la ley, sino a la fuerza productiva de la norma constitucional, la cual está obligado a cumplir y hacerla

cumplir, en virtud de ello, ¿Es constitucional y legalmente valido, que en los proceso judiciales en donde el juez está obligado constitucionalmente, a garantizar las reglas básicas del debido proceso, a las partes intervinientes?, pues como hemos analizado y lo seguiremos haciendo, no es viable desde cualquier óptica legal, ya que esto se podría catalogar como un abuso del derecho de penar del Estado que le ha facultad al juzgador en su nombre y representación, aplique dicho derecho estatal, no como erróneamente se piensa como “preventivo”, ya que más bien es vulneratorio, ya que derriba con su accionar un derecho constitucional.

A nivel internacional la Declaración Universal de Derechos Humanos, exige que el juez sea imparcial dentro de los procesos que conoce, el artículo 10 reconoce el derecho de las personas a ser oído públicamente en condiciones de igualdad, y acceder a tribunales independientes e imparciales.

Para la Fundación Acción pro derechos humanos, la imparcialidad procesal forma parte de una garantía indispensable para que exista el debido proceso, de esta manera se asegura la objetividad del juzgador, además se crea el ambiente necesario para que las partes crean en la administración de la justicia (Fundación Acción pro derechos humanos , 2015).

La imparcialidad del juez se sustenta en la confianza que genera asignar a un tercero en conocimiento de una causa, en donde este nada tiene que ver con la contienda, recayendo sobre el tercero la responsabilidad de dar una solución justa a un conflicto en donde son necesarios dos requisitos a) que no sea parte de la contienda, b) que resuelva en base a la objetividad que exige el ejercicio de la función. (Chunga, 2010, pág. 4), la apariencia de imparcialidad del juez y la convicción del justiciable de acceder a un juez justo, son condiciones que garantizan confianza en los tribunales.

A pesar de lo indicado en líneas anteriores, activistas como la Dra. Anunziatta Valdez, portavoz de movimiento de mujeres en Ecuador, quien en compañía de varias profesionales del derecho y activistas de movimientos pro derechos de la mujer, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad en el año 2014, en contra del COIP, a decir de la entrevistada por el Dr. Alfredo Pinoargoti, en el programa En Contacto de Ecuavisa, el COIP no cumple con los requisitos que establece el artículo 81 de la Constitución, esto es, ofrecer un procedimiento especial a víctimas de violencia intrafamiliar, sosteniendo que no solo debe de existir unidades judiciales contravencionales de violencia contra la mujer, sino que, ya deben de existir unidades judiciales especializadas en delitos mayores (femicidio, lesiones cuya incapacidad o de recuperación son mayor de 3 días, entre otras), a decir de la Dra. Valdez mientras la mujer está más afectada en sus derechos, menor garantías judiciales tiene, y que más bien el COIP tiene a ser regresivo en cuanto a los derechos de la mujer (Valdez , 2014), ante ello, efectivamente debe de existir un procedimiento expedito para los delitos que revisten mayor gravedad, pero, este procedimiento no puede colisionar directamente con normas expresas en la Constitución, refiriéndonos a las garantías básicas del debido proceso, más aun cuando de forma clara y precisa en la exposición de motivos que efectúa la Asamblea Nacional, que como interludio constan en el COIP, en donde la norma penal debe tener congruencia con la máxima norma, que es la norma constitucional.

La imparcialidad judicial significa “la posición neutral o trascendente de quienes ejercen la jurisdicción respecto de los sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio” (Wolters Kluwer, 2016)

Debemos de agregar que el Juez, debe de preconizar lo que establece la Constitución como máxima norma dentro del Estado, ya que al establecer en el artículo 66 que la violencia esta proscrita dentro del territorio ecuatoriano, en completa concordancia con el artículo 35 Ibídem, el mismo que hace referencia de las personas que conforman los grupos de atención prioritaria; teniendo en cuenta que la misma norma establece no como sujeto privativo de resguardo estatal a la mujer, sino a todos los demás integrantes del núcleo familiar, esto es a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, y también al hombre en caso de ser víctima de violencia, ya que existe en algunos casos una errónea aplicación de los principios constitucionales y legales por parte de los juzgadores, en solo conceder las medidas de protección a las mujeres de forma exclusiva.

En México, el 8 de marzo de 1999, entra en vigor la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Intrafamiliar, que fuera emitida por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en donde se establece la coordinación institucional a fin de brindar asistencia a la mujer y los miembros de la familia, desde el ámbito educacional, salud, desarrollo social, judicial; para lo cual se crea el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar en el Distrito Federal, en las instancias judiciales, corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus siglas PGJDF, establecer y efectuar los protocolos para verificar y certificar las lesiones y el daño psíquico emocional de la o las víctimas, para proceder a efectivizar el aparataje judicial mexicano, siendo una obligación del Juzgador, el de actuar con absoluta imparcialidad y objetividad, escuchando a las dos partes antes de emitir una medida de amparo o sustitutiva que va desde asistencia social, como procedimiento de conciliación, arbitral (Asamblea de Representantes del Distrito Federal Mexicano, 1996); cómo podemos analizar en México el juez debe antes de dictar una medida cautelar, hacer cumplimiento irrestricto del principio de igualdad procesal, esto es parte intrínseca de las garantías básicas del debido proceso, tanto la víctima como el victimario, tienen derecho a contradecir, acceder a las pruebas, alegar y en el proceso evaluatorio de pruebas, le juez podrá dictar la medida que corresponda de conformidad con la Constitución Mexicana, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y la pre citada Ley sobre la materia.

Similar situación que sucede en Ecuador acontece en Argentina, en la página web institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, consta el Programa “Las víctimas contra la violencia”, haciendo referencia de la Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la Violencia y el Abuso de Poder en el Ámbito Familiar, con este proyecto de ley, se pretende dar dinamismo a los programas establecidos en Argentina, para la erradicación de la problemática social de la violencia familiar, las cuales para la legislación argentina son consideradas violaciones a derechos humanos, por su naturaleza debe tener un tratamiento procesal especial, dando conceptos como maltrato infantil, violencia conyugal, maltrato a los ancianos y maltrato a las personas con discapacidad; la importancia de un proceso judicial justo y equitativo se plasma al momento de que el poder judicial por intermedio de sus jueces emita las medidas de protección, al respecto de ello consta en la página institucional lo siguiente: “10. JUICIO POR VIOLENCIA FAMILIAR 1. Es la innovación fundamental y tiene por finalidad la sanción del agresor, la reparación del daño causado y la derivación de las partes a programas o tratamientos especializados (que no sustituye la sanción al agresor), a partir de la etapa probatoria...” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 2016), a esto se suma lo que establece la Ley Nacional 24.417 Protección contra la Violencia Familiar, en su artículo 3, establece que el Juez una vez que asume conocimiento de la denuncia, requerirá un diagnóstico de interacción

familiar efectuado por peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físicos o psicológicos sufridos por la víctima, la situación de peligro y el medio social, ambiental de la familia afectada, dando oportunidad que la parte acusada solicite también practica de pericias técnicas; posteriormente en el artículo 4 de la citada ley, el juez podrá adoptar cualquier tipo de medida cautelar, una vez teniendo conocimiento de los antecedentes facticos contenidos en la denuncia, y dentro de las 48 de haber adoptado las medidas precautelatorias, convocara a las partes a una audiencia de mediación, instando a las partes para que acudan a programas educativos o terapéuticos, teniendo en cuenta los informes que hace referencia el artículo 3 del mismo cuerpo legal (Congreso de la Nación Argentina, 1994), el acusado o infractor antes de ser debidamente oído y contradecir las pruebas o informes como se habla en la legislación argentina, se le emite medidas precatelatorias, enervando la igualdad procesal y los más elementales principios constitucionales e internacionales del debido proceso.

Se da cuenta que en las legislaciones comparadas los juzgados o unidades judiciales, son especializadas en violencia intrafamiliar o violencia de familia, si bien es cierto que la mujer, ha sido socialmente excluida, y que las luchas sociales y los distintos foros pro derechos humanos y de la mujer, han peleado incansablemente para reivindicar un derecho negado por décadas y la indiferencia social con la que se ha tratado el tema, hasta lograr un sistema protector a nivel nacional e internacional, creemos que inclusive las unidades de violencia, debería de suprimirse la palabra mujer, ya que se estaría nuevamente excluyéndola, disfrazada de una discriminación positiva, la cual desde cualquier punto de vista enerva el principio de igualdad procesal, ya que los principios de vieja data como son inclusión y equidad, son inobservados y dan pauta a que los jueces tengan en la praxis procesos poco objetivos y vulneratorios de derechos humanos.

No podemos con ello, retroceder y al tiempo de las Comisarias de la Mujer y la Familia, cuya organización administrativa, orgánica y jurídica eran de competencia de las gobernaciones, lo que a nuestro criterio, es un arcaísmo y una aberración jurídica, que con el nuevo sistema jurídico constitucional, quedo proscrita, en donde las medidas de amparo constantes en el artículo 13 de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, eran prácticamente en buen francés prostituidas, muchas de ellas con o sin justificación, eran mal empleadas por las presuntas víctimas como un método de coerción hacia el hombre; es por ello la necesidad de tener un Reglamento con más coherencia a la Constitución.

## CONCLUSIONES

De acuerdo al marco constitucional del Ecuador en el plano procesal toda persona que es acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su grado de responsabilidad en el juicio, debiéndose respetar todos los derechos inherentes a la garantía de audiencia, este principio junto con el principio de la imparcialidad del juez entendido como el derecho a la objetividad de quien conoce la denuncia en los casos de violencia intrafamiliar es violado por el Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, porque el presunto agresor no tiene la posibilidad de expresarse ante el juez de garantías en una audiencia, está sujeto al cumplimiento de las medidas de protección impuestas por el juez que no actúa con la imparcialidad que le exige su cargo, dado que su finalidad es la protección de la mujer y miembros de la familia víctimas de violencia.

El reglamento en referencia no brinda los medios para garantizar que el presunto agresor sea escuchado, violando disposiciones constitucionales vigentes referidas al derecho de la presunción de inocencia, a la defensa, a la contradicción de las partes y al acceso oportuno a los órganos de

justicia, convirtiendo de esta manera al Juez en un aplicador de medidas muchas veces injustas y desproporcionadas, según el impacto que cause el relato de la denunciante.

Por lo tanto, es procedente cuestionar la falta o nula imparcialidad del Juez de Garantías Penales, que ante los casos de violencia intrafamiliar emite el dictamen de la medida de protección, basándose en el simple y llano conocimiento que la denuncia le proporciona sobre el hecho, sin que primero se haya escuchado a las partes en audiencia, dejando en situación de indefensión al acusado.

En consecuencia, el derecho a ser juzgado por un Tribunal imparcial exige que el Juez que conoce el presunto caso de violencia intrafamiliar debe aproximarse a los hechos, debe carecer de forma subjetiva de todo tipo de prejuicio y debe ofrecer a las partes garantías suficientes y objetivas respecto a su imparcialidad dentro de la causa que conoce, más cuando las normas contenidas en un Reglamento no pueden contravenir las normas de más alta jerarquía que gobiernan todo el sistema normativo dentro de un Estado Constitucional de derecho y justicia como lo es la norma constitucional, esto invalidaría el efecto jurídico en la aplicación ya que se está violentando el derecho que todo ciudadano ecuatoriano tiene a un justicia expedita y fundada en el respeto irrestricto de los derechos humanos, que como máxima obligación tiene el Ecuador.

Para ello es imprescindible y como propuesta que el Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sea revisado y reformado por cuanto contradice lo expuesto en el artículo 76 de la CRE, de forma aleatoria que la Escuela de la Función Judicial inicie una capacitación activa por medio de cursos, charlas o mesas de sensibilización en temas de violencia intrafamiliar pero no con la concepción sesgada y poco objetiva en cuanto a la aplicación de las medidas de protección, ya que estaríamos ante una verdadera discriminación, y no positiva, sino una discriminación lacerante, incompatible e inaudito con la igualdad de género a la que se refiere nuestra Constitución.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilar García, A. (2013). Presunción de Inocencia. Colección Textos sobre Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México D.F.: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
- Briones Velasteguí, M. (2008). Verdad Desnuda: Una aproximación al Discurso Judicial sobre la Violencia Sexual. Guayaquil: MAR- LOZ.
- Cabannellas, G. (1998). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Eliasta.
- Catacora, M. (2004). De la presunción al principio de inocencia. Lima: Revista de Derecho.
- Chávez Vallejo, G., & Montaña, J. (2013). Constitución para Servidores Públicos. Colección Nuevo Estado: Gobernabilidad, Derecho y Democracia. Segunda Edición 2013. Quito: Editorial IAEN.
- Chunga, L. (2010). El derecho al juez imparcial y el conocimiento previo del thema decidendi como causal de inhibición. Recuperado el 2 de 10 de 2014, de [http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a\\_20140908\\_02.pdf](http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140908_02.pdf)
- Cubas Villanueva, V. (1997). El Proceso Penal. Teoría y Práctica. Palestra Editores.
- D'Albora, F. (2002). Código Procesal Penal de la Nación. Lexis Nexis.
- Ferrajoli, L. (2001). Derecho y razón. Madrid: Trotta.
- Ferrer Mac- Gregor, E., & Pelayo Moller, C. (2012). La Obligación de "Respetar" y Garantizar los Derechos Humanos a la Luz de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Análisis del artículo 1 del Pacto de San José como fuente convencional del derecho procesal constitucional mexicano. Talca: Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca.
- Fundación Acción pro derechos humanos . (1 de 10 de 2015). Recuperado el 2015, de Corte Interamericana de Derechos Humanos : <http://www.derechoshumanos.net/tribunales/CorteInteramericanaDerechosHumanos.htm>
- García, J. (12 de 3 de 2011). Revista Judicial Derecho Ecuador. Recuperado el 02 de 09 de 2015, de Sistema de Protección de Víctimas y Testigos : <http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2012/04/12/sistema-de-proteccion-de-victimas-y-testigos>
- Joachín López, L. (2008). Análisis jurídico de la Violencia Intrafamiliar con el Problema de Género y la Creación de una Figura Jurídica en Nuestra Legislación. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

López, J. (21 de junio de 2013). derechoecuador.com. Obtenido de Presunción de Inocencia: <http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2013/06/21/presuncion-de-inocencia>

Maier, J. (2004). Derecho procesal penal. Fundamentos. Buenos Aires: Del Puerto.

Marchiori, H. (2006). Victimología 2. Estudio sobre victimización. Buenos Aires: Encuentro.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. (8 de septiembre de 2016). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Obtenido de Presidencia de la Nación: <http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/atencion-a-las-victimas/programa-victimas-contra-las-violencias/marco-legal.aspx>

Muñoz, F. (2003). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Hammurabi.

Naciones Unidas. (2000). Examen y Evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing: Informe del Secretario General. New York: Naciones Unidas.

Organización Mundial de la Salud. (2012). Violencia contra la mujer y la familia . New York.

Prado, G. (2013). Derecho constitucional guatemalteco. Guatemala: Praxis.

Saavedra García, F. (2013). Análisis Jurídico de la Violencia Intrafamiliar de la Pareja. Loja: Universidad Nacional de Loja.

Sánchez Poma, J. (2010). La Presunción de Inocencia como garantía del debido proceso y su aplicación al Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano. Tesis Previa a la Obtención del Título de Diplomado Superior en Derecho Procesal Penal. Cuenca, Azuay, Ecuador: Universidad de Cuenca- Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales- Escuela de Derecho.

Silva, C. (2008 ). Las Garantías de los Derechos ¿Invención o Reconstrucción?. en Neoconstitucionalismo y sociedad de Ramiro Ávila. Quito: Ministerio de Justicia, Derechos Humanos .

Silva, V. (30 de Noviembre de 2012). Instituto de Neurociencias. Obtenido de Violencia Intrafamiliar: <https://www.institutoneurociencias.med.ec/categorias-guia/item/851-violencia-intrafamiliar>

Valdez, A. (14 de agosto de 2014). Demanda de Inconstitucionalidad contra el Código Orgánico Integral Penal. (A. Pinoargoti, Entrevistador)

Valenzuela, J. (2012). El juez penal . Lima: Ara.

Velazques, F. (2007). Principios rectores de la nueva ley . Bogotá: Temis.

Wolters Kluwer. (8 de septiembre de 2016). Guías Jurídicas. Obtenido de Imparcialidad judicial: [http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJc1MTtLUouLM\\_DxbIwMDCwNzAwuQGGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAscjvhTUAAAA=WKE](http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUmJc1MTtLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQGGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAscjvhTUAAAA=WKE)

Zaffaroni, R. (2000). Tratado de derecho Penal . Buenos Aires: Sociedad Anónima .

#### NORMATIVA

Asamblea de Representantes del Distrito Federal Mexicano. (8 de julio de 1996). Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. Gaceta Oficial del Distrito Federal . México DF, México, Estados Unidos Mexicanos: Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Congreso de la Nación Argentina. (28 de diciembre de 1994). Ley Nacional 24.417. Protección contra la Violencia Familiar. Buenos Aires , Buenos Aires, Argentina: Registro Oficial B.O. 3 de enero de 1995.

Declaración de Derechos Humanos. (1945). Recuperado el 12 de 4 de 2015, de <http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights.html>

Código Orgánico Integral Penal. (2014). Quito: Registro Oficial.

Congreso de la Nación Argentina. (28 de diciembre de 1994). Ley Nacional 24.417. Protección contra la Violencia Familiar. Buenos Aires , Buenos Aires, Argentina : Registro Oficial B.O. 3 de enero de 1995.

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Quito: Registro Oficial.

Reglamento de actuaciones judiciales para hechos y actos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. . (2014). Quito: Consejo de la Judicatura.

